

PRESENTACIÓN  
*José Thompson J*

O COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS,  
SOCIAIS E CULTURAIS DAS NAÇÕES UNIDAS  
E O ENFRENTAMENTO À COVID-19  
*RENATO ZERBINI RIBEIRO LEÃO*

A CRISE DO SARS-COV-2 E O (FIM DO) INDIVIDUALISMO NACIONALISTA:  
A PROMOÇÃO DAS DIRETRIZES DO SIDH NA PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS NO BRASIL  
*MURILO BORGES*  
*VINICIUS VILLANI ABRANTES*

EL DERECHO A LA VIVIENDA EN EL CONTEXTO  
DE LA PANDEMIA MUNDIAL  
*ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ*

LA CORRUPCIÓN EN LA EMERGENCIA: REPERCUSIONES SOBRE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
*FRANCO GATTI*

“MENOS PEDRAS, MAIS FLORES”:  
PELO DIREITO À UMA CIDADE MAIS HUMANA EM TEMPOS DE PANDEMIA  
*ANA CÉLIA PASSOS PEREIRA CAMPOS*  
*IGOR DE SOUZA RODRIGUES*

LÍMITES CONVENCIONALES A LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y RESPUESTAS A LA PANDEMIA  
*MARCOS ANTONIO VELA ÁVALOS*

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19:  
¿DERECHO O PRIVILEGIO? EL CASO DEL ECUADOR  
*CAMILA YÁNEZ COELLO*

Julio - Diciembre 2020

72

Julio - Diciembre 2020



Embajada de Noruega  
Ciudad de México



REVISTA  
**IIDH**

Instituto Interamericano de Derechos Humanos  
Institut Interaméricain des Droits de l'Homme  
Instituto Interamericano de Direitos Humanos  
Inter-American Institute of Human Rights

Revista  
341.481

Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos  
Humanos.-Nº1 (Enero/junio 1985)  
-San José, C. R.: El Instituto, 1985-  
v.; 23 cm.

Semestral

ISSN 1015-5074

1. Derechos humanos-Publicaciones periódicas

Las opiniones expuestas en los trabajos publicados en esta Revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no corresponden necesariamente con las del IIDH o las de sus donantes.

Esta revista no puede ser reproducida en todo o en parte, salvo permiso escrito de los editores.

*Corrección de estilo: Español: José Benjamín Cuéllar M.  
Portugués: Maria Gabriela Sancho Guevara*

*Portada, diagramación y artes finales: Marialyna Villafranca Salom*

*Impresión litográfica: Litografía Imprenta Aguilar*

La Revista IIDH acogerá artículos inéditos en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, que hagan énfasis en la temática de los derechos humanos. Los artículos deberán dirigirse a: Editores Revista IIDH; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica.

*Se solicita atender a las normas siguientes:*

1. Se entregará un documento en formato digital que debe ser de 45 páginas, tamaño carta, escritos en Times New Roman 12, a espacio y medio.
2. Las citas deberán seguir el siguiente formato: apellidos y nombre del autor o compilador; título de la obra (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada. Para artículos de revistas: apellidos y nombre del autor, título del artículo (entre comillas); nombre de la revista (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada.
3. La bibliografía seguirá las normas citadas y estará ordenada alfabéticamente, según los apellidos de los autores.
4. Un resumen de una página tamaño carta, acompañará a todo trabajo sometido.
5. En una hoja aparte, el autor indicará los datos que permitan su fácil localización (Nº fax, telef., dirección postal y correo electrónico). Además incluirá un breve resumen de sus datos académicos y profesionales.
6. Se aceptarán para su consideración todos los textos, pero no habrá compromiso para su devolución ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

La Revista IIDH es publicada semestralmente. El precio anual es de US \$40,00. El precio del número suelto es de US\$ 25,00. Estos precios incluyen el costo de envío por correo regular.

Todos los pagos deben de ser hechos en cheques de bancos norteamericanos o giros postales, a nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Residentes en Costa Rica pueden utilizar cheques locales en dólares. Se requiere el pago previo para cualquier envío.

Las instituciones académicas, interesadas en adquirir la Revista IIDH, mediante canje de sus propias publicaciones y aquellas personas o instituciones interesadas en suscribirse a la misma, favor dirigirse al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica, o al correo electrónico: s.especiales2@iidh.ed.cr.

**Publicación coordinada por Producción Editorial-Servicios Especiales del IIDH**

**Instituto Interamericano de Derechos Humanos**  
Apartado Postal 10.081-1000 San José, Costa Rica  
Tel.: (506) 2234-0404 Fax: (506) 2234-0955  
e-mail:s.especiales2@iidh.ed.cr  
**www.iidh.ed.cr**

## Índice

### Presentación..... 7

*José Thompson J.*

### O comitê de direitos econômicos, sociais e culturais das nações unidas e o enfrentamento à COVID-19 ..... 13

*Renato Zerbini Ribeiro Leão*

### A crise do SARS-COV-2 E o (fim do) individualismo nacionalista: a promoção das diretrizes do SIDH na proteção dos refugiados no Brasil..... 49

*Murilo Borges*

*Vinicius Villani Abrantes*

### El derecho a la vivienda en el contexto de la pandemia mundial..... 71

*Alejandro Díaz Pérez*

### La corrupción en la emergencia: repercusiones sobre los derechos humanos..... 89

*Franco Gatti*

### “Menos Pedras, Mais Flores”: Pelo direito à uma cidade mais humana em tempos de pandemia..... 113

*Ana Célia Passos Pereira Campos*

*Igor de Souza Rodrigues*

### Límites convencionales a los estados de excepción y respuestas a la pandemia ..... 141

*Marcos Antonio Vela Ávalos*

**Vacunación contra la COVID-19:****¿Derecho o privilegio? El caso del Ecuador.....167***Camila Yáñez Coello***Presentación**

Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es motivo de satisfacción la salida a la luz pública de su Revista IIDH número 72, la más reciente de una iniciativa pionera iniciada en 1985 que se ha prolongado durante 36 años. Esta edición contiene siete artículos que abordan asuntos relativos a los derechos humanos en el contexto de la pandemia mundial ocasionada por la COVID19.

Sin duda, la situación que esta ha generado sacudió a la comunidad internacional. Atender la emergencia sanitaria y pilotear las consecuentes estrategias en lo relativo a la salubridad y la economía no ha sido un desafío menor; para todos los países del orbe ha significado una amplia curva de aprendizaje. Este contexto generó nuevos obstáculos a la garantía de los derechos humanos y profundizó las brechas de desigualdad entre los grupos sociales que –de por sí– ya se encontraban marginados como las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades rurales y las personas migrantes, por mencionar algunos. Adicionalmente, los recursos públicos e incluso privados se han volcado a la atención de la pandemia, colocando en muchos casos las prioridades de derechos humanos en un segundo plano o, al menos, disminuyendo la preocupación por las mismas.

Esto ha dejado para todos los actores de la comunidad internacional una serie de lecciones aprendidas; pero también de buenas prácticas que bien vale la pena identificar, difundir, monitorear, replicar y hasta cuestionar para transformarlas hacia mejores soluciones no solo para la situación sanitaria, sino para la

dignidad y los derechos de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En atención a ello, se aporta la presente edición de la Revista IIDH que incluye el análisis de diversas experiencias puntuales que se han suscitado en el marco de la COVID-19 y que pueden ser de utilidad para afrontar este escenario que aún persiste, cuyos efectos inmediatos y a mediano plazo también requerirán una atención con enfoque de derechos humanos.

Brevemente, a continuación se reseñan los artículos que contiene esta edición comenzando con la contribución titulada *O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas e o enfrentamento à COVID-19*, de Renato Zerbini Ribeiro Leão quien forma parte del Consejo Editorial de esta Revista. La importancia de su artículo reside en dar a conocer las preocupaciones y recomendaciones del órgano de interpretación, supervisión y seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la Organización de las Naciones Unidas, para el desarrollo de políticas públicas sobre la materia en un marco de afirmación del derecho a la salud respecto de la responsabilidad de los Estados desde la perspectiva de la protección internacional de los derechos humanos. Además de describir las características centrales del PIDESC y el Comité de Derechos Económicos y Sociales (CDESC) así como los pilares del derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos, aborda las principales líneas argumentativas y las conclusiones de tres importantes documentos aprobados recientemente por el Comité: la *Observación general núm. 25, relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales* (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del 30 de abril de 2020; la *Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)* y

*los derechos económicos, sociales y culturales*, del 17 de abril de 2020; y la *Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*, del 15 de diciembre de 2020.

*La crisis del SARS-COV-2 y el (fin del) individualismo nacionalista: la promoción de las directrices del SIDH en la protección de los refugiados en Brasil*, de Murilo Borges y Vinicius Villani Abrantes, se enfoca en analizar críticamente si tanto las políticas y los lineamientos del Estado brasileño como los de las organizaciones sociales involucradas en la atención a los refugiados apuntan a su inserción, con la necesaria asistencia médica y las ayudas pertinentes en el contexto de la crisis sanitaria. Su trabajo, considerado de carácter exploratorio y realizado con un enfoque cualitativo, además del análisis de textos especializados así como la legislación y las resoluciones nacionales e internacionales, parte de la hipótesis de que –debido a esta nueva realidad– los Estados deben abandonar la soberanía nacional individualista y, en un marco de cooperación global efectiva, responder a sus obligaciones internacionales ajustando sus acciones a los lineamientos internacionales e interamericanos para la protección de los derechos humanos en un entorno de solidaridad, fraternidad y cientificidad.

En su artículo *El derecho a la vivienda en el contexto de la pandemia mundial*, Alejandro Díaz Pérez se refiere a la mercantilización y la financiarización como unos de los obstáculos para la realización del derecho a la vivienda, lo que profundiza la desigualdad y da lugar a procesos discriminadores en el acceso a la vivienda –como la gentrificación– contra las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En el texto hace énfasis en las consecuencias de la crisis sanitaria sobre el disfrute de este derecho –del que revisa los estándares internacionales para su debida protección en general y, particularmente, los

emitidos en el contexto de la pandemia— y cómo la falta de acceso a una vivienda adecuada también trae consigo una problemática que limita las posibilidades de resguardo y afrontamiento de la COVID-19; al respecto, revisa las medidas tomadas en algunos países y, finalmente, presenta posibles soluciones de protección a este derecho social.

El artículo titulado *La corrupción en la emergencia: repercusiones sobre los derechos humanos*, del abogado argentino Franco Gatti, contiene argumentaciones relativas a la relación entre ambos fenómenos en términos de que las prácticas corruptas pueden traer consigo afectaciones directas a determinados derechos humanos y podrían constituirse en presupuestos o antecedentes de otros incumplimientos a obligaciones nacionales e internacionales en la materia. Todo ello, señala, en un contexto de emergencia sanitaria en el que los Gobiernos incrementaron sus poderes discrecionales a la par de la reducción de las posibilidades de fiscalización. Esto ha llevado a que las decisiones públicas fueran atravesadas por la opacidad y, en algunos casos, se verificaran manifiestos casos de corrupción.

En “*Menos pedras, mais flores*”: *pelo direito à uma cidade mais humana em tempos de pandemia*”, Ana Célia Passos Pereira Campos e Igor de Souza Rodrigues se refieren al caso del padre Júlio Lancellotti y las piedras del viaducto Dom Luciano Mendes de Almeida, en la ciudad de São Paulo, como un ejemplo del proceso de exclusión y de la lógica higienista impuesta en las ciudades especialmente respecto de la pandemia de COVID-19. Campos y Rodrigues basan su análisis en la teoría del cifrado de poder del jurista Ricardo Sanín-Restrepo y las restricciones urbanísticas. Desde una perspectiva genealógica invita a pensar cómo los aspectos materiales arquitectónicos hostiles se apoyan en

una conformación histórica, simbólica y representativa de los sectores pobres urbanos. Finalmente, se discute la disociación entre las formas técnicas y las relaciones sociales.

Límites convencionales a los estados de excepción y respuestas a la pandemia, de Marcos Antonio Vela Ávalos, es un artículo en el que se estudian las medidas adoptadas durante esos escenarios decretados como respuesta a la pandemia por la COVID-19 en muchos países latinoamericanos, desde la perspectiva de la incompatibilidad de algunas de aquellas con los límites previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El autor se detiene en las que incidieron en las posibilidades reales de acceder a las garantías judiciales indispensables para proteger a los derechos humanos, así como en las disposiciones desproporcionadas o discriminatorias.

En *Vacunación contra el COVID-19: ¿derecho o privilegio? El caso del Ecuador*, Camila Yáñez Coello se propone cuestionar el actual proceso de vacunación masiva mundial; además, se pregunta acerca de las desigualdades globales y lo que se está haciendo en su país. Para el análisis se sirve de dos enfoques: las relaciones internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos. Con base en estos, describe un escenario en el que muchos países están en desventaja frente a otros en el combate de la pandemia y cómo tal problemática constituye una grave vulneración del derecho a la salud y al disfrute de los beneficios de los avances científicos así como de sus aplicaciones, lo cual también representa un grave peligro para la salud pública en el ámbito mundial.

Concluyo esta presentación con el agradecimiento de siempre a la cooperación noruega, sin cuyo apoyo no sería posible la producción y difusión de nuestra Revista 72; al Consejo Consultivo Editorial por sus valiosos aportes; y a

---

las autoras y autores por sus relevantes contribuciones sobre la relación entre la pandemia y los derechos humanos desde diferentes perspectivas. Sin duda, la pluralidad de las miradas y la interdisciplinariedad de los análisis serán de utilidad para las personas interesadas en ahondar en las consecuencias de esta situación inédita para quienes habitamos el planeta.

*José Thompson J.*

Director Ejecutivo, IIDH

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

# O COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DAS NAÇÕES UNIDAS E O ENFRENTAMENTO À COVID-19

*Renato Zerbini Ribeiro Leão*\*

## INTRODUÇÃO

Em 2020 a humanidade conheceu uma pandemia atroz que continua ameaçando e ceifando vidas incessantemente. A atual geração jamais enfrentou uma situação sanitária dessa magnitude. Um ano transcorrido, em 2021, o cenário ainda é muito preocupante. Apesar das vacinas apresentadas, o ano iniciou-se com uma segunda onda de contaminação por um Coronavírus ainda mais impiedoso, eis que encontrado em inovadoras variantes mutantes de seu original em distintos rincões do planeta. Nos dois primeiros dias de 2021, sexta-feira, 01/01, e sábado, 02/01, contabilizaram-se mais de 1.100.000 casos da Covid-19 e ao menos 17.600 mortes por todo o mundo<sup>1</sup>. Nesse mesmo sábado, a Comissária Europeia da Saúde, Stella Kyriakides, admitiu uma insuficiência global na capacidade de produção das vacinas, razão pela qual o arranque planetário das campanhas de imunização estaria ofuscado. Quinze dias depois o

---

\* Ph.D. em Direito Internacional e Relações Internacionais. Membro desde 2011 e Presidente (2019-2020) do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. Membro do Conselho Diretor do Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Professor Titular do UniCEUB e do Mestrado em Ciência Política do UniEURO. Orcid: 0000-0002-0896-3624.

1 Para dados atualizados da Covid-19 patrocinados pela universidade Johns Hopkins acesse <https://coronavirus.jhu.edu/map.html> .



mundo já alcançava o fúnebre marco de mais de dois milhões de vidas perdidas para a pandemia da Covid-19: em 17/01/2021, um domingo, a Universidade Johns Hopkins já registrava 94.826.490 casos e 2.027.419 mortes em sua decorrência. Esses números provocaram o Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, a conclamar que “em memória desses dois milhões de almas, o mundo deve agir com uma solidariedade muito maior”.

A pandemia da Covid-19, ao desbordar os sistemas públicos de saúde e devastar diferentes setores da vida – como a economia, a educação, a produção de alimentos e a segurança social, dentre outros – é uma clara ameaça aos direitos humanos. Estes, para um enfrentamento exitoso do vírus, devem ser observados desde suas perspectivas indivisível e interdependente. Se os países não atuarem em consonância com os direitos humanos, o risco de que os direitos econômicos, sociais e culturais sejam menoscabados, com isso aumentando o sofrimento dos grupos mais marginalizados e vulneráveis, encrudesce-se significativamente.

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC ou Pacto) proporciona um regime consolidado de afirmação e proteção desses direitos, notadamente quanto ao direito à saúde. Este consta de instituições como o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC), de normas (PIDESC e seu Protocolo), princípios (boa-fé; igualdade e não discriminação; *pro homine*; complementaridade, indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos), de documentos (Declaração do CDESC para não deixar ninguém para trás à luz da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável; Observações Gerais nº 14 e nº 25; a Declaração da pandemia da Covid-19; e, a Declaração sobre o acesso universal e equitativo às vacinas da Covid-19) e de regras (*Pacta Sunt Servanda*; regra da norma mais favorável e regra do esgotamento dos recursos

internos) que consagram a existência de um verdadeiro regime de proteção à saúde oriundo do PIDESC.

Sendo um regime um conjunto de instituições, de normas, de princípios e de regras capazes de influenciar, gerando-lhes um padrão de conduta, os países, as organizações internacionais e os indivíduos em uma determinada agenda ou tema<sup>2</sup>, o CDESC é o órgão central do robusto regime de proteção ao direito à saúde, edificado a partir do PIDESC e amalgamado pelos princípios da complementaridade, indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos. Eis que estes são um todo harmônico, possuem uma dependência recíproca de maneira que se complementam em si mesmos<sup>3</sup>. Para contribuir a esse esforço conjunto de combate à Covid-19, o CDESC ilumina os pilares desse regime capazes de somarem à mobilização global contra o impiedoso Coronavírus, indicando, ademais, que as respostas à pandemia devem estar embasadas nos melhores conhecimentos científicos disponíveis em aras de proteção da saúde pública, conforme o direito de toda pessoa a gozar dos benefícios do progresso científico e de suas aplicações explícito no artigo 15, parágrafo 1, alínea b do Pacto.

O PIDESC é juridicamente vinculante. Seus Estados partes têm a obrigação de adotar medidas para senão evitar, mitigar os efeitos derivados dos impactos da pandemia. Estas devem ser edificadas a partir dos melhores conhecimentos científicos

2 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. *O regime de proteção aos migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas* em **Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU)**. Brasília: CSEM, vol. 27, nº 57, dezembro de 2019, p. 175. Disponível em <http://remhu.csem.org.br/index.php/remhu/article/view/1236>.

3 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. *Os 50 anos dos dois pactos internacionais da ONU: um olhar especial sobre o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais* em CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto; LEAL, César Barros e LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (Coord.). **O cinquentenário dos dois pactos de direitos humanos da ONU**. Fortaleza: IBDH, p. 259-278, 2016, p. 261.

em prol da proteção eficaz da saúde a que todo ser humano tem o direito de desfrutar. O Brasil é Estado parte do Pacto desde 1992<sup>4</sup> e, portanto, em consonância com o princípio da boa-fé que rege o direito internacional, está obrigado a seguir as diretrizes indicadas pelo CDESC na matéria.

A importância desse artigo é identificar e reconhecer este regime, pouco conhecido pelo público em geral, mas que em matéria de preocupações e de recomendações para o desenvolvimento de políticas públicas no assunto, a afirmação do direito à saúde e a responsabilidade dos países para com o enfrentamento da Covid-19 é muito robusto desde a perspectiva da proteção internacional dos direitos humanos. Para o CDESC, órgão de interpretação, supervisão e monitoramento do PIDESC, todas as pessoas na jurisdição de um Estado parte do Pacto podem desfrutar dos direitos nele reconhecidos.

Em prol da identificação e do reconhecimento desse regime, o artigo estrutura-se sobre as características centrais do PIDESC e do CDESC, ademais dos pilares jurídicos do direito à saúde desde a perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Em seguida, mergulha na apresentação das principais linhas argumentativas e conclusivas de três importantes documentos recentemente aprovados pelo Comitê no assunto: a Observação Geral número 25 de 2020, relativa à ciência e os DESC; bem como a Declaração da pandemia por Coronavírus (Covid-19) e os DESC de 17 de abril de 2020; a Declaração sobre o acesso universal e equitativo às vacinas da Covid-19 de 27 de novembro de 2020; e a Declaração sobre vacinação universal acessível para Covid-19, cooperação internacional e propriedade intelectual de 12 de março de 2021.

---

4 Vigência no Brasil dada pelo Decreto nº 591 de 6 de julho de 1992.

## 1. O PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS (PIDESC)

O PIDESC é um tratado internacional multilateral do sistema de direitos humanos da ONU<sup>5</sup>. Trata-se de um dos pilares essenciais da Carta Internacional dos Direitos Humanos: um conjunto de convenções internacionais que ademais do PIDESC alberga o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 10 de dezembro de 1948. O PIDESC e o PIDCP foram adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966 (Resolução 2200 A XXI), entrando em vigência em 1976<sup>6</sup>.

O PIDESC identifica três responsabilidades que recaem sobre os Estados para a proteção dos direitos neles contidos: a de respeitar, isto é, os Estados devem abster-se de interferir direta ou indiretamente nesses direitos; a de proteger, isto é, os Estados devem tomar medidas para assegurar que outros atores, como os empresários, políticos, religiosos ou qualquer pessoa possa interferir nesses direitos; e, a de desfrutar, ou seja, os Estados devem tomar medidas para a realização desses direitos. Ao respeitar, proteger e tornar efetivos os direitos enunciados no Pacto, os Estados partes poderão cumprir suas promessas de cuidar para que ninguém fique para trás no empenho coletivo

---

5 Em 31 de dezembro de 2020 são 171 os Estados partes do PIDESC.

6 O PIDESC e o PIDCP entraram em vigência em 3 de janeiro e 23 de março, respectivamente.

em prol de um mundo transformado conforme a Agenda 2030<sup>7</sup> das Nações Unidas<sup>8</sup>.

As normas do PIDESC dispõem sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, direito ao trabalho, direito a condições equitativas e satisfatórias de trabalho, direito a fundar e se afiliar a sindicatos, direito da segurança social, direito à proteção e a assistência à família, direito a um nível de vida adequado, direito ao mais alto nível possível de saúde física e mental, direito à educação, e, direito à cultura e ao gozo dos benefícios do progresso científico. Estes, à luz dos princípios da livre determinação, da igualdade e da não discriminação.

O primeiro parágrafo do artigo segundo do PIDESC exige que os Estados partes adotem medidas imediatas para garantir a todas as pessoas em suas jurisdições o pleno exercício dos direitos nele garantidos. Tais medidas deverão ser próprias ou alcançadas mediante a assistência e a cooperação internacionais. A Carta de São Francisco ou Carta da ONU (a partir da literalidade de seus artigos 1.3 e 55, incisos “a” e “c”, lidos conjuntamente com o artigo 56) consagra a interpretação extensiva de que a proteção internacional aos direitos humanos deve ser considerada como uma questão vinculada aos interesses da comunidade internacional. Portanto, em prol da afirmação da dignidade humana, a cooperação internacional constituirá uma fonte de restrições à discricionariedade estatal. A restrição a qualquer um dos atuais patamares da proteção internacional dos

7 A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável constitui o compromisso mundial comum renovado dos Estados de erradicar a pobreza em todas suas formas e dimensões, incluída a extrema pobreza, mediante a promoção de sociedades justas, inclusivas e sustentáveis.

8 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2019/1. La promesa de no dejar a nadie atrás: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 05/04/2019, § 20, p.7.

direitos humanos, inclusive os emanados pelo CDESC, poderia ser interpretada como uma violação a princípios basilares da proteção internacional da pessoa humana, como o princípio da não redução de parâmetros da proteção dos direitos humanos, o princípio da norma mais favorável e o princípio *pro homine*<sup>9</sup>. Esse entendimento guia os membros do CDESC na aplicação e interpretação do PIDESC nos assuntos relacionados aos direitos à saúde e ao progresso científico.

Não à toa, no parágrafo 15 de sua Declaração da pandemia por Coronavírus (Covid-19) e os direitos econômicos, sociais e culturais, o Comitê indica que os Estados partes do PIDESC devem adotar medidas urgentes, especiais e específicas, inclusive mediante cooperação internacional, para proteger e mitigar os efeitos da pandemia em grupos vulneráveis. Nestes destacam-se as pessoas mais velhas, as pessoas com deficiência, os refugiados, assim como comunidades e grupos submetidos à discriminação e desvantagens estruturais. Dentre tais medidas, o CDESC assinala, por exemplo, a adoção daquelas especialmente adaptadas para proteger a saúde e os meios de vida dos grupos minoritários vulneráveis, como os povos indígenas<sup>10</sup>.

A título de ilustração dos dois parágrafos anteriores, destaca-se que em 21/07/2020 os 27 países membros da União Europeia firmaram o Plano de Recuperação Europeia (ERP), um acordo de recuperação econômica histórico, mediante o qual esses Estados alocaram 750 bilhões de euros para a reconstrução da economia

9 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. *O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI* em BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira (Org.). **Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas**. Brasília: ACNUR, CONARE & MJ, p. 70-96, 2010, p. 73-74.

10 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 17/04/2020, §15, p.4.

do bloco, afetada pela pandemia da Covid-19. Dentre outros, destacam-se como seus principais alicerces a destinação de 312,5 bilhões de euros para o financiamento de programas de reformas e de investimentos que cada país beneficiário deverá definir em um plano nacional de recuperação e o estabelecimento de uma meta de que 30% dos seus gastos devem ser dedicados à luta contra a mudança climática<sup>11</sup>.

Nesse contexto, a cooperação internacional implica compartilhar pesquisas, profissionais, medicamentos e equipamentos médicos, assim como as boas práticas para frear o Coronavírus. Ademais, coordenar as medidas que se adotem para reduzir os efeitos econômicos e sociais da crise gerada em consequência da pandemia, assumindo esforços conjuntos por todos os países em prol de uma recuperação econômica efetiva e equitativa. Senão ainda, no centro dessas iniciativas internacionais devem estar as necessidades dos grupos vulneráveis, desfavorecidos, bem como dos países fragilizados<sup>12</sup>.

O artigo 2.1 do PIDESC versa sobre a realização progressiva dos direitos. A própria expressão “se compromete a adotar medidas, por todos os meios apropriados, incluindo a adoção de medidas legislativas” exige que todos os Estados partes comecem a adotar medidas imediatas a fim de conseguir o pleno desfrute dos direitos contidos no Pacto<sup>13</sup>. Estas incluem, não esgotando outras possibilidades, as de caráter administrativo, financeiro,

11 EU. **Sítio Web oficial da União Europeia**: [https://europa.eu/european-union/index\\_pt](https://europa.eu/european-union/index_pt), acesso em 22/07/2020, às 10:45 horas.

12 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 17/04/2020, §19, p.5.

13 CDESC. Observação Geral nº 3. ONU. *Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Documento HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)*, de 27 de maio de 2008, §7, p.18.

educacional e social. Nessa esteira, os Estados partes obrigam-se juridicamente a adotar medidas legislativas, sobretudo quando as leis existentes sejam claramente incompatíveis com as obrigações contraídas em virtude do PIDESC.

Já a expressão “assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos” obriga aos Estados partes, independentemente de seu grau de desenvolvimento ou riqueza nacional, a avançarem imediatamente e à brevidade possível para a efetividade dos DESC<sup>14</sup>. Particularmente, no que toca as disposições não discriminatórias e a obrigação dos Estados partes em se absterem de violar, por ação ou omissão, as medidas protetoras legais ou de outros tipos que exigem cumprimento imediato. Inclusive, o CDESC afirmou que essa obrigação existe independentemente de um incremento dos recursos disponíveis. Isso porque todos os recursos existentes devem estar dedicados à efetividade dos direitos proclamados pelo PIDESC<sup>15</sup>. Em época da pandemia, capaz de afetar o âmago do direito humano à saúde, esse entendimento deve prevalecer sem restrições de nenhuma ordem jurídica, normativa ou política.

O CDESC identificou como obrigações de efeito imediato a adoção de medidas para a plena efetivação dos direitos reconhecidos no PIDESC e a proibição da discriminação. Suas existências ou não oferecem pilares para avaliar supostas violações do Estado, seja por ação ou omissão. Os DESC não são puramente programáticos. Pelo contrário impõe obrigações operativas diretas. O não cumprimento destas pode ser justificável.

14 ONU. *Derechos Humanos. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Folleto Informativo nº 16 (Rev. I). Campaña Mundial pro Derechos Humanos*. OACNUDH: Ginebra, 1996, p.10.

15 CDESC. Observação Geral nº 3. ONU. *Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Documento HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)*, de 27 de maio de 2008, §7-10, p.11.

Por exemplo, a existência de leis ou de práticas estatais que discriminem por razões de gênero, raça, deficiência, orientação sexual ou nacionalidade, dentre outras, impondo barreiras ao gozo dos DESC, constituem violações às obrigações de efeito imediato. Também, a falta de políticas públicas para a realização dos direitos ou a demora em derrogar legislação ou práticas discriminatórias constituem violações desse tipo<sup>16</sup>.

De fato, o CDESC, em sua Observação Geral nº 1, assinalou que o PIDESC atribui especial importância ao conceito de realização progressiva dos DESC. Com efeito, os Estados partes foram instados a incluírem em seus relatórios dados capazes de avaliar o progresso alcançado quanto à aplicação efetiva desses direitos dentro de prazos razoáveis<sup>17</sup>. Essa efetividade progressiva demanda uma reflexão acerca das dificuldades no mundo real quanto à efetividade dos DESC à luz das obrigações estatais de alcançarem esses objetivos o mais eficazmente possível. Todas as medidas deliberadamente retroativas deverão ser consideradas cautelosamente, sendo justificadas apenas quando se referirem ao máximo dos recursos disponíveis<sup>18</sup>. Isto não significa, porém, que os Estados partes possam prolongar indefinidamente a adoção

16 ONU. ECOSOC. Documento E/C.12/GC/20. *Observación general num. 20 (2009). La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*. 23/11/2009, §30, p.10.

17 Sobre a exigência jurídica pelos órgãos de supervisão judicial dos tratados internacionais de direitos humanos em aplicar nas suas decisões um prazo razoável, sobretudo, nos casos que implicam violações de direitos econômicos, sociais e culturais, consultar LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro, *La construcción jurisprudencial de los Sistemas Europeo e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales*, Núria Fabris Editora: Porto Alegre, 2009, p. 119-120.

18 CDESC. Observação Geral nº 3. ONU. *Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Documento HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)*, de 27 de maio de 2008, §7-10, p.11.

de medidas capazes de garantir os direitos das pessoas sujeitas a sua jurisdição.

O artigo 2.2 do PIDESC obriga aos Estados partes a se absterem de comportamentos discriminatórios, modificando leis e práticas que permitam a discriminação. Proíbe os particulares e os organismos públicos a realizarem práticas discriminatórias. Em casos de discriminação, procedimentos judiciais e outros métodos de recursos devem ser garantidos<sup>19</sup>.

Inclusive, os Estados partes têm obrigações extraterritoriais relacionadas com os esforços mundiais para enfrentar a covid-19. Particularmente, os países desenvolvidos devem evitar adotar decisões – como a imposição de limites às exportações de equipamentos médicos – que obstaculizam o acesso a equipamentos vitais para as vítimas mais pobres da pandemia. Assim mesmo, os Estados partes devem assegurar que as medidas fronteiriças unilaterais não dificultem a circulação de bens necessários e essenciais, especialmente alimentos básicos e equipamentos sanitários. Por fim, toda restrição baseada no objetivo de garantir o abastecimento nacional tem de ser proporcional e atender as necessidades urgentes de outros países<sup>20</sup>.

Em sede de suas observações conclusivas, o CDESC teve a oportunidade de destacar a indissociabilidade entre o meio ambiente, povos indígenas, nível de vida adequado e o direito à saúde, pois estes conformam um anel interativo em prol

19 ONU. *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Manual para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Serie de Capacitación Profesional nº 12 – Derechos Humanos*. ACNUDH: Genebra, 2004, p. 15.

20 ONU. ECOSOC. Documento E/C.12/2020/1. *Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 17/04/2020, §20, p.5.

da afirmação da dignidade humana. Assim, após o diálogo construtivo em decorrência do sexto relatório periódico do Canadá, o Comitê inquietou-se com o fato de que os povos indígenas desse Estado parte vivessem confinados em condições precárias, gerando-lhes severos problemas de saúde. Ademais, o fato de que estes tivessem acesso limitado à água potável e a serviços de saneamento também foram fatores motivadores de grande preocupação. Em consequência, o Comitê instou ao Estado parte a intensificar seus esforços para enfrentar a crise de moradia adequada dos povos indígenas, em consulta com seus respectivos governos e organizações. Atualmente, o consentimento livre, prévio e informado é pedra angular do direito internacional dos povos indígenas. Assim mesmo, o CDESC insistiu com o cumprimento do compromisso do país em garantir o acesso à água potável e a serviços de saneamento, concomitantemente velando para a participação ativa na planificação e gestão dos recursos hídricos dos povos indígenas. Nesse sentido, o Estado parte deveria levar em consideração não somente o direito econômico dos povos indígenas, mas também o valor cultural que a água tem para eles<sup>21</sup>. Para o CDESC, o artigo 11 do Pacto, direito à um nível de vida adequado, não denota uma situação estacionária e sim uma melhora contínua das condições de existência de todo ser humano, estando inexoravelmente interligado, por isso, ao direito à saúde<sup>22</sup>. Tais preocupações do Comitê para com os povos indígenas devem ser tomadas seriamente em conta por todos os Estados partes do PIDESC, sobretudo em tempos do Coronavírus que têm nos povos indígenas um de seus alvos mais vulneráveis.

21 ONU. ECOSOC. Documento E/C.12/CAN/CO/6. *Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Canadá*. 23/03/2016.

22 ONU. *Derechos Humanos. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Folleto Informativo n° 16 (Rev.1). Campaña Mundial pro Derechos Humanos*. OACNUDH: Ginebra, 1996, p.20.

## 2. O COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS (CDESC)

O CDESC é um órgão internacional do sistema ONU que está conformado por 18 especialistas independentes. Ele aplica, interpreta e monitora o PIDESC. Foi estabelecido pela resolução 1985/17 do Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC) em 28 de maio de 1985.

Todos os Estados partes no PIDESC estão obrigados a submeter relatórios ao CDESC sobre a implementação e aplicação dos direitos dispostos no Pacto. O primeiro relatório deve ser enviado ao cabo dos dois anos iniciais da vigência do PIDESC. Depois, a cada cinco anos deverão ser encaminhados seus relatórios de seguimento àquele relatório pioneiro. O CDESC examinará cada relatório, celebrará um diálogo construtivo com os Estados partes e a eles endereçará suas preocupações e recomendações na forma de observações conclusivas.

O CDESC reúne-se em Genebra, em períodos de sessões anuais, adotando sua interpretação das disposições do PIDESC em forma de observações gerais. Também emite cartas e declarações sobre os mais variados assuntos de necessidade para a afirmação dos DESC na seara internacional.

Desde 2013, com a entrada em vigência do Protocolo Facultativo ao Pacto, o Comitê está facultado para apreciar comunicações individuais envolvendo pretensas violações aos direitos contidos no PIDESC<sup>23</sup>. O quarto artigo do regulamento do Protocolo diz que as comunicações poderão ser apresentadas

23 O Protocolo Facultativo ao PIDESC é um tratado internacional unanimemente adotado pela Assembleia Geral da ONU em 10/12/2008 (Resolução A/RES/63/117). Foi aberto para a assinatura em 2009 e vige desde 05 de maio de 2013, três meses depois que o Uruguai, décimo Estado parte a ratificá-lo procedesse com o seu depósito, conforme reza o texto do Protocolo.

por pessoas ou grupos de pessoas que se encontrem sob a jurisdição de um Estado parte, alegando serem vítimas de uma violação a qualquer dos direitos enunciados no Pacto. Esse fato confere um posicionamento especial ao CDESC com relação aos demais órgãos internacionais não judiciais e, também, judiciais de proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. A possibilidade da cidadania dos Estados partes no Protocolo Facultativo ao PIDESC denunciarem individualmente seus países alça o CDESC como o único órgão internacional, na atualidade, capacitado para receber denúncias individuais referentes à violação dos direitos econômicos, sociais e culturais contidos no Pacto.

O Brasil, por exemplo, é Estado parte do PIDESC, mas ainda não celebrou o seu Protocolo Facultativo, razão pela qual a sua cidadania não pode encaminhar denúncias individuais ao CDESC. Por isso, o Estado brasileiro, no presente momento, está obrigado a cumprir o disposto no artigo 16 do Pacto, isto é, apresentar os relatórios sobre as medidas que tem adotado, bem como os progressos realizados, de cara a assegurar o respeito aos direitos contidos no PIDESC. Assim sendo, após o diálogo construtivo com o Comitê, este publicará suas observações conclusivas, com preocupações e recomendações, as quais deverão ser acatadas pelo Brasil. Nesse sentido, importante destacar que em 04/06/2020 o Estado brasileiro encaminhou o seu Terceiro Relatório de Seguimento para o CDESC<sup>24</sup>. Será este documento que o Comitê tomará como base para o diálogo construtivo que deverá ser celebrado em 2021 ou 2022, a depender do calendário interno que emergirá dos efeitos da

---

24 CESCR. *Document E/C.12/BRA/3, 08/06/2020. Third periodic report submitted by Brazil under articles 16 and 17 of the Covenant, due in 2014.* 08/06/2020. Disponível em: [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fBRA%2f3&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fBRA%2f3&Lang=en).

pandemia sobre os trabalhos dos órgãos de supervisão dos tratados de direitos humanos do sistema das Nações Unidas.

O anterior não significa que a cidadania em geral e a sociedade civil organizada do Brasil estejam marginalizadas de todo o processo oficial de apresentação de relatórios ante o CDESC. Os chamados relatórios sombras, aqueles produzidos pela sociedade civil em oposição aos relatórios oficiais dos Estados partes, ou preenchendo lacunas destes, são sempre muito bem-vindos pelo Comitê, pois são excelentes fontes de informações e contrapontos essenciais às informações oficiais capazes de qualificar positivamente o diálogo construtivo com os Estados partes<sup>25</sup>. Por isso, o CDESC estimula a participação da sociedade civil em todas as etapas de preparação e apresentação dos relatórios oficiais pelos Estados partes. E quando for a hora da análise do Terceiro Relatório de Seguimento do Estado brasileiro, bem como das medidas tomadas pelo Brasil no enfrentamento ao Coronavírus, os relatórios sombras produzidos pela sociedade civil brasileira serão muito importantes para que o Comitê formule conclusões e recomendações certas nos assuntos pertinentes<sup>26</sup>.

Como consequência direta dos efeitos da pandemia da Covid-19, as sessões presenciais do Comitê que se realizariam durante o mês de outubro de 2020 e fevereiro/março de 2021, na sede suíça da ONU em Genebra, foram canceladas e o

---

25 Os relatórios sombras preparados pela sociedade civil poderão ser enviados ao CDESC, em qualquer momento, através do e-mail da secretaria do Comitê: [cescr@ohchr.org](mailto:cescr@ohchr.org).

26 Acerca da importância da sociedade civil para a afirmação dos direitos econômicos, sociais e culturais, ver LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. *El rol de la sociedad civil organizada para el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en el siglo XXI: un enfoque especial sobre los DESC* em **Revista do Instituto Interamericano de Direitos Humanos**. San José: IIDH, nº 51, p. 249-271, 2010.

CDESC trabalhará à distância, em modo on-line, estando seus membros em seus países de origem. Por essa razão, os diálogos construtivos com os Estados partes do PIDESC previstos para essas sessões foram excepcionalmente postergados, salvo em dois casos cujos Estados partes tivessem condições de dialogar à distância por meio virtual conforme decisão da Mesa Diretiva do CDESC de novembro de 2020<sup>27</sup>. O Comitê, portanto, enquanto perdurar a impossibilidade de reunião presencial em Genebra em decorrência da pandemia, decidiu se debruçar primordialmente sobre as observações gerais em desenvolvimento, as denúncias individuais apresentadas em virtude do Protocolo Facultativo, as formulações da lista de questões prévias aos países que ainda virão apresentar seus relatórios em um futuro próximo e distintas declarações como as virtualmente aprovadas durante o ano de 2020, a maioria das quais apresentadas ao longo deste artigo. Assim sendo, o Coronavírus também impactou na essência do trabalho do CDESC.

---

27 Do sistema de órgãos de tratados de direitos humanos da ONU, apenas o Comitê de Direitos Humanos e o CDESC decidiram dialogar virtualmente com Estados partes em suas sessões inaugurais de 2021. No caso do CDESC, aprovou-se o diálogo construtivo virtual com apenas 2 Estados partes do PIDESC para a sessão de fevereiro/março de 2021, a primeira do ano. Países foram contatados, mas apenas poucos manifestaram interesses ou condições técnicas de seguir adiante com o diálogo construtivo virtual com o Comitê. Este, não obstante, aguarda a confirmação desses países. Destaca-se, assim mesmo, a incidência de muitos problemas técnicos durante as reuniões virtuais internas celebradas pelo Comitê durante o ano de 2020. A continuar, estes se consubstanciarão em sérios empecilhos para a qualidade de um diálogo construtivo com os Estados partes. Tais problemas, também observados pelos demais Comitês, foram e são objetos de preocupações recorrentes pelos presidentes dos diferentes órgãos de tratados de direitos humanos do sistema ONU. Preocupações estas plasmadas em vários de seus documentos oficiais.

### 3. O DIREITO HUMANO À SAÚDE NO PIDESC

Para o CDESC a saúde é um direito humano fundamental e indispensável para o exercício pleno dos demais direitos humanos. Todo ser humano tem direito ao desfrute do mais alto nível possível de saúde capaz de lhe permitir viver dignamente segundo o artigo 12 do PIDESC. A interpretação deste artigo pelo CDESC reconhece a obrigação dos Estados partes em assegurar a seus cidadãos o gozo do mais alto nível possível de saúde, conceito este que abraça desde o acesso equitativo até umas garantias mínimas de assistência sanitária no caso de doenças<sup>28</sup>. Ademais, o direito à saúde está estritamente vinculado com o exercício de outros direitos humanos, destes dependendo, tais como, por exemplo, nível de vida adequado, alimentação, moradia, trabalho, educação, dignidade humana, vida, não discriminação, igualdade, não ser submetido a torturas, vida privada, acesso à informação e a liberdade de associação, reunião e circulação. Estes, bem como outros direitos e liberdades constantes da Carta Internacional dos Direitos Humanos compõem a integralidade do direito à saúde<sup>29</sup>.

Em sua Observação Geral nº 14, que trata do direito ao desfrute do nível mais alto possível de saúde, o Comitê alertou que os Estados têm a obrigação de respeitar esse direito, particularmente abstendo-se de denegar ou limitar o igual acesso de todas as pessoas aos serviços de saúde preventivos, curativos e paliativos; não impondo práticas discriminatórias como

---

28 ONU. *Derechos Humanos. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Folleto Informativo nº 16 (Rev. I). Campaña Mundial pro Derechos Humanos*. OACNUDH: Genebra, 1996, p.21.

29 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2000/4. Observación general num. 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*. 11/05/2000, §3, p.1.



políticas de Estado; senão ainda recusando-se a impor práticas discriminatórias quanto à saúde e as necessidades da mulher e outros grupos de especial atenção<sup>30</sup>.

Ao se debruçar sobre o conteúdo normativo do artigo 12 do Pacto, o CDESC indica que o direito à saúde não deve ser entendido simplesmente como um direito a estar saudável, pois esta entranha liberdades e direitos. Entre as liberdades estão o direito de toda pessoa a controlar sua saúde e seu corpo, incluindo as liberdades sexual e genésica, ademais do direito de não padecer ingerências, como o direito a não ser submetido a torturas nem a tratamentos e experimentos médicos não consentidos. Por outro lado, entre os direitos contempla-se o relativo a um sistema de proteção da saúde capaz de oferecer às pessoas oportunidades iguais para gozar do mais alto nível possível de saúde, conceito este que abarca tanto as condições biológicas, como as socioeconômicas essenciais das pessoas, aí incluídos os recursos disponíveis pelo Estado. Por conseguinte, o Comitê alertou aos Estados partes quanto às suas obrigações de respeitar o direito à saúde, particularmente abstando-se de denegar ou limitar o igual acesso de todas as pessoas aos serviços de saúde preventivos, curativos e paliativos; não impondo práticas discriminatórias como políticas de Estado; senão ainda recusando-se a impô-las no âmbito da saúde e das necessidades da mulher e outros grupos de especial atenção. Eis que o direito à saúde deve ser entendido como um direito ao gozo de toda uma gama de facilidades, bens, serviços e condições necessárias para alcançar o mais alto nível possível de saúde<sup>31</sup>.

30 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2000/4. Observación general num. 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*. 11/05/2000, §34, p.13.

31 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2000/4. Observación general num. 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo*

Não só isso, o CDESC interpreta o direito à saúde como um direito inclusivo que compreende não apenas a atenção de saúde oportuna e apropriada, senão ainda os principais fatores determinantes da saúde, como o acesso a água limpa potável e a condições sanitárias adequadas, o fornecimento adequado de ambientes saudáveis, uma nutrição apropriada, uma moradia adequada, condições sadias no trabalho e no meio ambiente, acesso à educação e informação sobre questões relacionadas com a saúde, nestas incluída a saúde sexual e reprodutiva. Assim mesmo, o processo de adoção de decisões sobre as questões relacionadas com a saúde nos planos comunitário, nacional e internacional deve contar com a participação da população em todas suas etapas de consubstanciação<sup>32</sup>.

O direito à saúde contém quatro elementos essenciais e interrelacionados cujas aplicações estão sujeitas às condições prevalentes em cada Estado parte. A disponibilidade significa que cada Estado parte deverá contar com um número suficiente de estabelecimentos, bens, programas, serviços públicos, leitos e centros de atenção à saúde. A acessibilidade impõe aos Estados partes que os estabelecimentos, bens e serviços de saúde sejam acessíveis para todos, sem nenhum tipo de discriminação. A aceitabilidade significa que todos os estabelecimentos, bens e serviços de saúde respeitem a ética médica e as culturas de maneira apropriadas, ou seja, observando a cultura das pessoas, das minorias, dos povos e das comunidades, iluminados pelos requisitos de gênero e pelo ciclo da vida, devendo estar concebidos para respeitar a confidencialidade e melhorar o

*12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*. 11/05/2000, §8-9, p.3.

32 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2000/4. Observación general num. 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*. 11/05/2000, §11, p.4.

estado de saúde das pessoas. Finalmente, a qualidade, vale dizer, os estabelecimentos, bens e serviços de saúde deverão ser apropriados desde o ponto de vista científico e médico. Senão ainda, contar com uma boa qualidade, como por exemplo, pessoal sanitário capacitado, medicamentos e equipe hospitalar cientificamente aprovados e em bom estado, água limpa potável e condições sanitárias dignas<sup>33</sup>.

O CDESC recomenda aos Estados partes incorporar a perspectiva de gênero nas suas políticas, programas e pesquisas em matéria de saúde para uma melhor promoção da saúde do homem e da mulher. Um enfoque na perspectiva de gênero reconhece a importância dos fatores biológicos e socioculturais em suas saúdes. Especialmente, para eliminar a discriminação contra a mulher é preciso elaborar e aplicar uma ampla estratégia nacional objetivando a promoção do direito à saúde da mulher ao longo de toda a sua vida. Esta deve focar a prevenção e o tratamento das doenças que afetam as mulheres, assim como políticas encaminhadas a proporcioná-las acesso a cuidados de saúde de alta qualidade e que estejam aos seus alcances, incluídos os serviços em matéria sexual e reprodutiva<sup>34</sup>.

O CDESC identificou, ademais, um direito à saúde próprio dos povos indígenas. Estes têm direitos a medidas específicas capazes de melhorar seus acessos aos serviços e atenções de saúde, que devem ser apropriados desde o ponto de vista cultural, levando em consideração os cuidados preventivos, as práticas

33 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2000/4. Observación general num. 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*. 11/05/2000, §12, p.4-6.

34 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2000/4. Observación general num. 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*. 11/05/2000, §20-21, p.9.

curativas e as medicinas tradicionais. É dever dos Estados partes do PIDESC proporcionar recursos para que os povos indígenas estabeleçam, organizem e controlem esses serviços de modo que possam desfrutar do mais alto nível possível de saúde física e mental. Igualmente se deverão proteger às plantas medicinais, os animais e os minerais necessários para o pleno gozo da saúde dos povos indígenas. Por isso, a ligação umbilical entre estes e o meio ambiente é inegociável. No exercício de suas funções o Comitê observa que nas comunidades indígenas, a saúde do indivíduo conecta-se com a saúde da sociedade em seu conjunto, apresentando assim uma dimensão coletiva. Em consequência, as atividades relacionadas com o desenvolvimento que induzem o deslocamento de populações indígenas, contra suas vontades, de seus territórios e entornos tradicionais, ocasionando perdas de seus recursos alimentícios e a ruptura de suas relações simbióticas com a terra, exercem um efeito daninho sobre a saúde dessas populações indígenas<sup>35</sup>.

O CDESC concluiu de maneira reiterada e a ciência já demonstrou que o elo entre o meio ambiente e o ser humano é inquebrantável, sendo seus futuros inexoravelmente conectados e interdependentes. Essa conexão é ainda mais profunda na relação entre os povos indígenas e o meio ambiente, pois àqueles têm neste o ente que os acolhe, que os abriga, fornecendo todo o necessário para as suas existências com dignidade. O respeito à natureza, à fauna e à flora, é essencial para que o ser humano viva em equilíbrio e harmonia consigo mesmo e com os entes conviventes, desfrutando de saúde espiritual, física e mental<sup>36</sup>.

35 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2000/4. Observación general num. 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)*. 11/05/2000, §27, p.11.

36 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. *A prevenção pandêmica e um legado geracional em Correio Braziliense*, Brasília, p. 9, 13/07/2020, Opinião.

#### **4. A OBSERVAÇÃO GERAL NÚMERO 25 (2020), RELATIVA À CIÊNCIA E OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS (ARTIGO 15, §§ 1.b, 2, 3 e 4, DO PIDESC)<sup>37</sup>**

Até julho de 2020, o CDESC adotou 25 observações gerais. Estas auxiliam os Estados partes e a comunidade em geral a entenderem o alcance e o significado de cada um dos artigos do PIDESC. Orientam os países, os tribunais judiciais, as distintas instâncias administrativas e o público em geral acerca dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e das liberdades que todo ser humano pode desfrutar em virtude do Pacto. Em seu processo de consubstanciação, as observações gerais contam com um relator ou correlatores, apoio da secretaria técnica do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), diálogos com outras agências do sistema ONU, audiências públicas com parceiros da sociedade civil e entidades interessadas, debates com universidades e fundações afins à temática específica. Sua última versão rascunhada fica à disposição do público geral na página eletrônica do CDESC por um prazo razoável a fim de receber comentários e sugestões pertinentes antes da aprovação, pelo Comitê, de sua versão final.

A observação geral nº 25 (OG25) é uma contribuição fundamental do CDESC para com o esforço mundial de enfrentamento à Covid-19. Por seu intermédio, o Comitê deixa claro que o direito a gozar dos benefícios do progresso científico e de suas aplicações, artigo 15, §1, alínea b do PIDESC, está em profunda conexão com o direito à saúde, artigo 12 do Pacto. E essa relação inexorável edifica-se a partir de quatro pilares. Um primeiro afirmando que o progresso científico gera

<sup>37</sup> Aprovada pelo CDESC em seu 67º período de sessões, realizado em Genebra durante os dias 17 de fevereiro a 6 de março de 2020. Publicada em 30 de abril de 2020.

avanços e aplicações médicas, como as vacinas, que previnem e tratam doenças. No entendimento do Comitê, os Estados partes do PIDESC deveriam promover a investigação científica, mediante apoio financeiro ou outros incentivos, criando novas aplicações médicas, sobretudo para os mais vulneráveis (ex.: crianças, migrantes, mulheres, povos indígenas, refugiados, etc.). Especialmente, conforme reza o artigo 12, §2, alínea c do Pacto, os Estados partes deveriam dar prioridade para a promoção do progresso científico objetivando facilitar meios melhores e mais eficazes, ademais de mais acessíveis à prevenção e tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas e de outras índoles<sup>38</sup>. Esse entendimento é fruto de reiterados diálogos construtivos do CDESC com os Estados partes no tocante ao direito à saúde, emergindo atualmente como uma das principais lições aprendidas no combate a pandemias, devendo, portanto, à luz de uma fina interconexão entre a saúde, a ciência e os direitos humanos ser aplicado no enfrentamento à Covid-19.

Uma segunda base de entendimento constrói-se a partir do fato de que algumas aplicações do progresso científico estão protegidas por regimes de propriedade intelectual. O CDESC considera que estes não devem ser realizados em detrimento do direito à saúde. Pelo contrário, tais regimes deveriam ser interpretados e aplicados de modo a apoiar o dever dos países em proteger a saúde pública, particularmente, promovendo o acesso universal a medicamentos. Nesse sentido, os Estados partes no PIDESC deveriam abster-se de conceder prazos desproporcionalmente longos de proteção às patentes para os novos medicamentos, a fim de permitir, num prazo razoável, a

<sup>38</sup> ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/GC/25. Observación general num. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1b), 2, 3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. 30/04/2020, §67, p.16.

produção de medicamentos genéricos seguros e eficazes para as mesmas doenças<sup>39</sup>.

Como terceiro pilar está o dever de colocar ao alcance de todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação e com especial atenção aos mais vulneráveis, as melhores aplicações disponíveis do progresso científico necessárias para o gozo do nível mais alto possível de saúde. Tal ação valendo-se inclusive da assistência e cooperação internacionais. Finalmente, como quarto pilar, entende-se que os Estados partes do Pacto deveriam esforçar-se ao máximo para que os medicamentos e os tratamentos médicos estejam fundamentados em experimentos e provas científicas, de modo que os riscos deles derivados estejam adequadamente avaliados e os pacientes possam dar seus consentimentos com fulcro em informações claras e transparentes<sup>40</sup>.

O CDESC entende que os princípios de transparência e participação são essenciais para que a ciência seja objetiva e fiável, não estando esta sujeita a interesses que não sejam científicos ou incompatíveis com os princípios fundamentais dos direitos humanos e o bem-estar da sociedade. Os países deveriam harmonizar suas políticas com os melhores conhecimentos científicos disponíveis, fomentando a confiança e o apoio de toda a sociedade aos conhecimentos científicos disponíveis<sup>41</sup>.

39 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/GC/25. Observación general num. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1b), 2, 3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. 30/04/2020, §69, p.17.

40 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/GC/25. Observación general num. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1b), 2, 3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. 30/04/2020, §70-71, p.17.

41 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/GC/25. Observación general num. 25 (2020), relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 15, párrafos 1b), 2, 3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos*

Conforme anteriormente já alertado, são em momentos como este, de intensa e preocupante vulnerabilidade da saúde pública por consequência pandêmica, que as ações das instituições e dos agentes políticos são escolhidas entre dois caminhos bastante nítidos e distintos com relação à transparência de informações<sup>42</sup>:

...um centrado na produção de dados confiáveis colhidos cientificamente, usados pelos tomadores de decisão e disponibilizados ao público, reconhecido como transparência ativa. E outro suprimindo ou restringindo a produção, o uso decisório ou o acesso público às informações, batizado de transparência refutada. Assumir uma atitude de transparência ativa exigirá a produção e a busca sincera por dados verossímeis, a sua utilização na tomada de decisões e uma divulgação honesta à população, sujeitando as autoridades públicas aos apoios, rejeições e críticas inerentes ao processo democrático. O outro caminho perpassará pela adoção de decisões políticas e institucionais embasadas no ignorantismo e permeadas por mecanismos de baixo crivo democrático. A escolha é simples e implicará vidas e mortes; a diferença estará apenas nos números futuros de uma realidade implacável em maior ou menor medida...

Claro está que a transparência ativa é a prescrita pelo direito internacional dos direitos humanos para o enfrentamento às pandemias em geral, incluindo a da Covid-19.

*Económicos, Sociales y Culturales*. 30/04/2020, §53-54, p.13.

42 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro e RESENDE, Ranieri Lima. *Pandemia de coronavírus: um teste para a transparência de instituições e agentes políticos em O Estado de São Paulo*, São Paulo, 30/3/2020, política, blogs Fausto Macedo. Disponível em <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pandemia-de-coronavirus-um-teste-para-a-transparencia-de-instituicoes-e-agentes-politicos/>

## 5. A DECLARAÇÃO DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) E OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS<sup>43</sup>

O CDESC clama aos Estados partes do PIDESC para que estes, com base em informação oportuna e transparente, aprimorem e melhorem os mecanismos de alertas antecipados sobre epidemias emergentes capazes de se converterem em pandemias. Tal reclamo foi feito no âmbito da Declaração do Comitê sobre a pandemia de Coronavírus publicada em 17 de abril de 2020, através da qual se destaca que as pandemias são um claro exemplo da necessidade de cooperação científica internacional de cara ao enfrentamento de ameaças transnacionais, já que uma epidemia local pode se converter rapidamente em uma pandemia de consequências devastadoras se as medidas adequadas não forem adotadas<sup>44</sup>.

Essas medidas adequadas deverão ser tomadas de modo urgente e fundamentadas nos melhores conhecimentos científicos para proteger a saúde pública. Se for necessário limitar algum dos direitos contidos no PIDESC, as medidas deverão ser razoáveis, proporcionadas e exclusivamente tomadas para combater a crise de saúde pública derivada da Covid-19. Assim mesmo, deverão ser retiradas tão logo deixem de ser necessárias para esse fim. Senão ainda, o acesso à justiça e a remédios jurídicos eficazes devem estar plenamente garantidos, especialmente para os grupos mais vulneráveis e marginalizados<sup>45</sup>.

43 Aprovada pelo CDESC em 6 de abril de 2020.

44 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 17/04/2020, §23, p.5.

45 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales*

O Comitê chama a atenção dos Estados partes com relação aos povos indígenas, aos refugiados e as pessoas que vivem em rincões afetados por conflitos, pois estes são especialmente vulneráveis durante a pandemia da Covid-19. Trata-se de grupos que em muitos casos carecem de acesso adequado à água, sabão ou desinfetante. Ademais, não podem acessar as infraestruturas para a realização dos exames detectadores do vírus. Para estes, o acesso a serviços sanitários e informações é nulo ou diminuto, fazendo com que em suas populações encontrem-se porcentagens muito elevadas de doenças crônicas e transtornos variados de saúde, configurando-lhes como um grupo de risco elevado para o contágio da Covid-19<sup>46</sup>.

Com se não bastasse, essa pandemia agudiza as desigualdades de gênero uma vez que as responsabilidades para com os cuidados das crianças, da família, dos idosos e dos lares recaem de maneira desproporcional sobre as mulheres. Estas, em circunstâncias de confinamento ou isolamento social, são mais suscetíveis a sofrerem violência doméstica. Os Estados partes deverão tomar as medidas necessárias para combaterem todos os tipos de violências baseadas no gênero<sup>47</sup>.

Entre as recomendações do CDESC para o combate a pandemia da Covid-19 também está a necessidade da adoção de medidas regulamentares apropriadas para que os recursos

*y culturales. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 17/04/2020, §10-11, p.3.

46 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 17/04/2020, §9, p.3.

47 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 17/04/2020, §8, p.3.

de atenção sanitária, tanto no setor público como no privado, sejam mobilizados e compartilhados entre toda a população a fim de garantir uma resposta ampla e coordenada à crise. Todos os profissionais sanitários devem ter facilidade de acesso à indumentária e aos materiais de proteção adequados para evitar o contágio. É essencial que os responsáveis pelas tomadas de decisão nos Estados partes consultem e prestem a devida atenção às recomendações desses profissionais no desenvolvimento de suas ações<sup>48</sup>.

Medidas especiais e específicas de caráter urgentes devem ser tomadas para proteger e mitigar os efeitos da pandemia em grupos vulneráveis como os idosos, as pessoas com deficiência, os refugiados, as populações afetadas por conflitos, as mulheres, os povos indígenas, assim como comunidades e grupos submetidos à discriminação e desvantagens estruturais. Tais medidas podem ser, dentre outras, o fornecimento de água e sabão às comunidades que deles carecem; a posta em marcha de programas específicos para proteger os empregos, os salários e as aposentadorias de todos os trabalhadores, incluídos os trabalhadores migrantes não documentados; a imposição de uma moratória para o despejo forçado ou execuções hipotecárias de moradias durante a pandemia; a adoção de medidas especialmente adaptadas para a proteção da saúde e dos meios de vida dos grupos minoritários vulneráveis, como os povos indígenas; e a garantia de um acesso exequível e equitativo para todos aos serviços de internet com fins educativos<sup>49</sup>.

48 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales*. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 17/04/2020, §13, p.3.

49 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales*. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Os Estados partes também devem se esforçar para que todos os trabalhadores estejam protegidos dos riscos de contágio no ambiente de trabalho. Para tanto devem adotar medidas apropriadas a fim de garantir que os empregados reduzam ao mínimo os riscos de contágio conforme as melhores práticas em matéria de normas de saúde pública. Assim mesmo, para a proteção dos empregos, as aposentadorias e outras prestações sociais dos trabalhadores durante a pandemia, e até mesmo para mitigar os efeitos econômicos desta, os Estados partes devem adotar medidas imediatas como, por exemplo, subvenções salariais, abatimentos fiscais e o estabelecimento de programas complementares de segurança social e proteção dos salários<sup>50</sup>.

Num cenário pandêmico, deve-se evitar a especulação com alimentos, produtos de higiene, medicamentos, bem como com todo e qualquer produto essencial. Assim mesmo, seja tanto para reduzir o risco de transmissão do Coronavírus, como para proteger à população do perigo que supõe a desinformação, é indispensável dispor de informação precisa e acessível sobre a pandemia da Covid-19<sup>51</sup>.

Para o CDESC, a Covid-19 destacou a importância de se investir adequadamente em sistemas de saúde pública, programas integrais de proteção social, trabalho decente, moradia, alimentação, sistemas de água e de saneamento, assim como em instituições de promoção da igualdade de gênero. Finalmente,

*Culturales* de 17/04/2020, §15, p.4.

50 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales*. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 17/04/2020, §16, p.4.

51 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales*. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 17/04/2020, §17-18, p.4.

o Comitê exorta aos Estados partes do PIDESC a cuidarem para que a extraordinária mobilização de recursos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 dê o impulso necessário para mobilizar recursos de longo prazo objetivando o desfrute pleno e em condições de igualdade dos direitos econômicos, sociais e culturais consagrados no Pacto<sup>52</sup>.

## 6. DECLARAÇÃO SOBRE O ACESSO UNIVERSAL E EQUITATIVO ÀS VACINAS DA COVID-19

O CDESC aprovou em 27/11/2020 a Declaração sobre o acesso universal e equitativo às vacinas da Covid-19. Esta ilumina, desde uma óptica dos direitos humanos, as principais obrigações dos Estados partes do PIDESC para com o enfrentamento da atual pandemia à luz das vacinas cientificamente desenvolvidas para tanto. Todo ser humano tem o direito ao padrão mais alto de saúde física e mental. Neste incluído o acesso a programas de imunização contra doenças infecciosas. De igual maneira, as pessoas têm o direito de desfrutar dos benefícios do progresso científico, o qual abrange o acesso a uma vacina eficaz e segura, desenvolvida a partir dos melhores conhecimentos científicos. Nas pandemias, como a causada pelo Coronavírus, é a ciência quem deve guiar todo o conhecimento capaz de combatê-las.

Há uma série de razões científicas (de ordem exata, humana, médica e social) para que todo ser humano se vacine. Dentre estas, não esgotando todos os benefícios e as vantagens da vacinação, sublinha-se que estatisticamente as vacinas salvam vidas e protegem a saúde; protegem os vulneráveis e as gerações

52 ONU. ECOSOC. *Documento E/C.12/2020/1. Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 17/04/2020, §24-25, p.6.

futuras; protegem e apoiam os serviços de saúde; economizam tempo, dinheiro e recursos variados; e, na era das *fake news*, evitam a propagação de notícias falsas.

De acordo ao CDESC, o acesso às vacinas para todas as pessoas deve ser garantido pelos países à luz do máximo de seus recursos disponíveis e conforme as medidas necessárias para uma vacinação universal e sem discriminação alguma. O dever de imunizar contra as principais doenças infecciosas, prevenindo e controlando epidemias é uma obrigação prioritária em consequência do direito à saúde. Assim sendo, no atual cenário pandêmico, os países têm de dar máxima prioridade à disponibilização das vacinas capazes de contribuir ao enfrentamento da Covid-19. Esse acesso é um direito do ser humano e deve ser facilitado pelos países, sobretudo quando estes são partes do PIDESC. Estes têm a obrigação de facilitar informações fidedignas, transparentes e fidedignas nos melhores conhecimentos científicos para que a cidadania decida vacinar-se ou não. Nessa esteira, toda trava administrativa e burocrática deve ser superada em prol de políticas públicas céleres e eficazes para o acesso universal e equitativo às vacinas<sup>53</sup>.

O direito à saúde exige que os países tornem acessíveis, aceitáveis e de boa qualidade, as unidades de saúde, serviços e bens, incluindo as vacinas. Estas não devem ser apenas produzidas e disponibilizadas, também devem, conforme reza o princípio da igualdade e não discriminação, ser acessíveis para todos: motivos como religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, raça, identidade étnica, idade, deficiência, condição migratória, origem social, pobreza ou qualquer outro não podem ser impeditivos. Pelo contrário, a acessibilidade física às vacinas,

53 ONU. ECOSOC. *Document E/C.12/2020/2. Statement on universal and equitable access to vaccines for COVID-19 by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights* de 27/11/2020, §1-3, p.1-2.

especialmente para grupos marginalizados e desfavorecidos, valendo-se de canais estatais ou privados, notadamente por meio do fortalecimento da capacidade de suas entregas e distribuições, deve ser garantida. Senão ainda, o fornecimento gratuito das vacinas, especialmente para pessoas de baixa renda e em situação de pobreza, deve ser assegurado. Ademais, sobretudo nessa era digital e das *fake news*, o acesso a informações relevantes, através de informações científicas verossímeis sobre segurança e eficácia das diferentes vacinas, potencializadas por campanhas públicas capazes de protegerem as pessoas contra informações falsas, enganosas ou pseudociências, deve ser robustamente garantido. Finalmente, ninguém deve ficar para trás se decidir tomar uma vacina<sup>54</sup>.

O CDESC recorda ademais que muitas vacinas, na iminência de suas aprovações, foram desenvolvidas por empresas privadas e podem estar sujeitas ao regime de propriedade intelectual. Essas empresas esperam obter lucro e é justo que recebam uma compensação razoável por seus investimentos. No entanto, a propriedade intelectual não é um direito humano, mas um produto social, com uma função social. Consequentemente, os países têm o dever de impedir que a propriedade intelectual e os regimes legais de patentes prejudiquem o gozo dos direitos humanos. Assim, também cabe às entidades empresariais absterem-se de invocar direitos de propriedade intelectual incompatíveis com o direito humano de acesso a uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. É uma obrigação dos países garantir, à brevidade possível e por todos os meios necessários, inclusive mediante assistência e cooperação internacional, o acesso universal e equitativo às vacinas<sup>55</sup>.

---

54 ONU. ECOSOC. *Document E/C.12/2020/2. Statement on universal and equitable access to vaccines for COVID-19 by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights* de 27/11/2020, §4, p.2.

55 ONU. ECOSOC. *Document E/C.12/2020/2. Statement on universal and*

A priorização do acesso às vacinas deve ser apoiada por todos, devendo este ser organizado mediante mecanismos transparentes e participativos garantidores de uma distribuição global baseada em necessidades médicas reais e considerações científicas da saúde pública. Todo o ser humano que assim desejar, poderá e deverá vacinar-se. Isto é crucial para o controle da pandemia da Covid-19. E os Chefes de Estados e de Governos, sobretudo daqueles países que são signatários do PIDESC, devem garantir que assim seja.

Na esteira das premissas anteriores, o CDESC aprovou em 12 de março de 2021 a Declaração sobre vacinação universal acessível para Covid-19, cooperação internacional e propriedade intelectual. Para o Comitê, o regime de propriedade intelectual deve ser interpretado e implementado de forma a apoiar o dever dos países em proteger a saúde pública. O direito à saúde exige que os países tornem acessíveis, aceitáveis e de boa qualidade as unidades, serviços e bens da saúde, incluindo as vacinas. Estas devem ser produzidas e disponibilizadas à luz do princípio da igualdade e não discriminação, isto é, serem acessíveis para todos sem nenhum impedimento. Ademais, a acessibilidade física às vacinas, especialmente para grupos marginalizados e desfavorecidos, valendo-se de canais estatais ou privados, notadamente por meio do fortalecimento da capacidade de suas entregas e distribuições, deve ser garantida. Senão ainda, o fornecimento gratuito das vacinas, especialmente para pessoas de baixa renda e em situação de pobreza, deve ser assegurado. E sobretudo nessa era digital e das *fake News*, reitera a necessidade do acesso a informações relevantes e cientificamente comprovadas acerca da importância das vacinas. Sublinha-se a

---

*equitable access to vaccines for COVID-19 by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights* de 27/11/2020, §6-11, p.2-3.



essencialidade da cooperação internacional para o sucesso de todas essas ações<sup>56</sup>.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência de um verdadeiro regime de proteção ao direito humano à saúde derivado do PIDESC é uma realidade. Nota-se um conjunto de normas sólidas (o PIDESC e seu Protocolo), instituições (ONU, CDESC e Estados partes), princípios reconhecidos (boa-fé, igualdade e não discriminação, *pro homine*, complementaridade, indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos), documentos oficialmente reconhecidos pelos Estados partes (observações conclusivas, observações gerais, cartas e declarações), capazes de gerar um padrão de conduta nos Estados partes do PIDESC e contribuir à afirmação da dignidade humana das pessoas sob suas jurisdições. O CDESC direcionou esse regime para contribuir ao enfrentamento da pandemia por Coronavírus. Tal contribuição deve estar acompanhada por uma ação conjunta entre países, organizações internacionais e indivíduos para cessar ou mitigar os efeitos da Covid-19. O regime emergido do PIDESC é capaz de iluminar o caminho a seguir por esses atores centrais das relações internacionais e sujeitos contemporâneos do direito internacional público. Finalmente, quando da afirmação da dignidade humana no direito internacional se trata, a sorte de cada um está inexoravelmente conectada à dos demais, bem como à do planeta. Sobretudo, quando a ameaça é universal em consequência de uma pandemia causada por um vírus.

---

56 ONU. ECOSOC. *Document E/C.12/2021/1. Statement on universal affordable vaccination for COVID-19, international cooperation and intellectual property by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights* de 12/03/2021.

Assim mesmo, cabe primordialmente aos Estados partes do PIDESC a responsabilidade em adotar políticas públicas, medidas administrativas e legislações orientadas para o gozo efetivo dos direitos e deveres contidos no PIDESC. Foram eles quem, de boa-fé, assumiram esse compromisso internacional.

O CDESC é o intérprete principal e final do PIDESC. É ele quem está facultado pelo Pacto para explicar e declarar o alcance do conteúdo de seus artigos. Por isso, é ele quem se preocupa com o cumprimento dos artigos pelos Estados partes, recomendando ações administrativas, executivas, judiciais, legislativas e de todo tipo, sem discriminação alguma, a fim de que estas estejam em consonância com os padrões mais atualizados do direito internacional dos direitos humanos em quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais. Especificamente quanto à pandemia da Covid-19, o Comitê declarou que os Estados partes no PIDESC têm a obrigação de adotar medidas para evitar, ou ao menos mitigar, os efeitos do Coronavírus no desfrute dos direitos econômicos, sociais e culturais, especialmente no direito à saúde dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Finalmente, ninguém pode ficar para trás.

Para que as obrigações e os direitos contidos no PIDESC sejam cumpridos, os Estados partes devem adotar uma série de medidas, inclusive de caráter urgentes, assentadas nos melhores conhecimentos científicos disponíveis para a proteção da saúde pública, com isso fomentando a confiança e o apoio de toda a sociedade aos conhecimentos científicos disponíveis. Ademais, a transparência ativa deve reger as informações compartilhadas pelos Estados partes à sociedade em geral.

A cooperação internacional também deve se consagrar como um importante pilar no enfrentamento à Covid-19. Esta implica em compartilhar pesquisas, profissionais, medicamentos e

equipamentos médicos, assim como as boas práticas para frear o Coronavírus. Ademais, ela coordena as medidas a serem adotadas para reduzir os efeitos econômicos e sociais da crise gerada pela pandemia, assumindo esforços conjuntos por todos os países em prol de uma recuperação econômica efetiva e equitativa.

O acesso universal e gratuito às vacinas para todos os seres humanos que assim desejarem enfrenta desafios de toda ordem, seja nos países com mais recursos ou naqueles que experimentam escassez destes. Assim sendo, os agentes públicos deverão esforçar-se ao máximo para que os Estados, sobretudo os que são partes do PIDESC, possam cumprir com suas obrigações de facilitar esse acesso. Senão ainda, o dever civilizatório e geracional impõe a todo o ser humano contribuir a esse esforço de saúde coletivo também individualmente. Desse modo, enquanto a imunização pelas vacinas não alcança ao conjunto da população mundial, cada pessoa deverá estar atenta, difundindo e cooperando com os menos favorecidos, quanto às práticas das medidas prescritas pela ciência para o enfrentamento à Covid-19, como podem ser o distanciamento social, a vigilância epidemiológica, o uso de máscaras, a higiene corporal e a não proliferação de informações falsas ou de *fake news*. Finalmente, o presente e o futuro de cada um de nós estão inexoravelmente conectados.

Por isso, os agentes públicos, sejam eles de qualquer um dos três poderes da República e independente das esferas administrativas de seus mandatos, devem pautar-se em suas ações, decisões e manifestações para o combate à pandemia em consonância com os melhores conhecimentos científicos disponíveis (nessa seara a vacinação imediata é o principal desafio) e à luz dos compromissos de Estado em matéria de direitos humanos, especialmente, observando cabalmente o regime de proteção ao direito à saúde emanado do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.